

PROPOSICIÓN

9 de junio de 2020

Proposición modificativa al proyecto de Ley 224 / 19 Cámara “Por medio del cual se crea el Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial y se dictan otras disposiciones”

En el ejercicio de mi función legislativa consagrada en la Ley 5 de 1992, la cual está prevista para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos de nuestra Constitución, me permito presentar la siguiente proposición modificativa de algunas disposiciones contenidas en el artículo 1 del proyecto de ley 224/19 Cámara:

Modificar el contenido del artículo 1 del proyecto de ley 224 de 2019, el cuál quedará así:

Artículo 1°. Certificado de responsabilidad ética empresarial. Créase el Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial, el cual será otorgado por el Ministerio del Trabajo a las empresas que vinculen dentro de su personal, población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los niveles de dirección, supervisión y operación, en un porcentaje igual o superior al **10%** de su planta laboral.

Parágrafo. Dentro de los 6 meses posteriores a la promulgación de esta Ley, el Ministerio de Trabajo expedirá los protocolos para la **acreditación de los requisitos para el otorgamiento del de dicho certificado.**

Modificar el contenido del parágrafo 1 del artículo 2 del proyecto de ley:

Artículo 2°. Incentivos. Las empresas, las uniones temporales y/o los consorcios que **vinculen personal relacionado con el objeto de la presente ley, tendrán los siguientes incentivos:**

- a) **La vigencia del Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial constituirá un indicador positivo para las empresas, uniones temporales y/o consorcios que deseen contratar con el Estado. En ese caso, respecto del puntaje establecido para la evaluación de las ofertas en los procesos de selección abierta, la Entidad Estatal concederá un puntaje adicional si el proponente acredita el número de personas contratadas, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.**
- b) **Prelación en el acceso a programas, subvenciones o beneficios adoptados por entidades públicas siempre que estén orientados al desarrollo de planes y programas con la participación activa y permanente de población objetiva de la presente ley.**

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional expedirá la reglamentación que establezca los criterios y mecanismos de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores pertenecientes a población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los niveles de dirección,

Betty Zorro
H. Representante a la Cámara

supervisión, y operación que dieron lugar al otorgamiento del Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.

El certificado presentado por el contratista deberá encontrarse vigente durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato estatal.

La reducción del número de trabajadores acreditados para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Parágrafo 3° El Gobierno nacional tendrá un término de seis (6) meses para reglamentar lo consagrado en el presente artículo.

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Colombia como un Estado Social de Derecho tienen la obligación, en el marco de la Constitución Nacional y del Derecho internacional, de adoptar medidas orientadas a prevenir, eliminar y sancionar la discriminación de los grupos históricamente marginalizados como las comunidades indígenas y afrocolombianas, los niños y las niñas, las personas mayores, las mujeres, la población desplazada, las personas LGBTI o la población en condición de discapacidad. Con el fin de garantizar un tratamiento similar en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión consagrado en el Art. 13 Constitución Política Nacional, sería recomendable reconocer por lo menos, el mismo porcentaje que para otros grupos históricamente marginados como por ejemplo las personas en situación de discapacidad que por ley 361 del 97 cuyo porcentaje es mínimo del 10% de la nómina para acceder a algunos de los beneficios establecidos en dicha ley. En ese sentido, abogando al término de igualdad y en concordancia con esta norma de contenido similar, se plantea una modificación al 10% para garantizar la participación activa de este grupo poblacional en igual condiciones con el resto de la población vulnerable que en general presentan o viven algún tipo de discriminación laboral.

Ahora bien, el inciso dos de este artículo que hace referencia tomar el certificado como un indicador positivo para las empresas que deseen contratar con el estado sobraría ya que se encuentra estipulado en el Artículo 2°. Incentivos. Por lo cual se propone eliminar dicho inciso.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el proceso de contratación directa, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, no requiere un proceso de selección abierto que requiera asignación de puntajes para la adjudicación de contratos, incluir la expresión "contratación directa" dentro del proyecto sería inane.

De igual forma, limitar los incentivos a las empresas que participen en procesos de selección adelantados por entidades estatales puede restringir el impacto de esta importante iniciativa, por lo que se plantea incluir un beneficio general partiendo de los precedentes encontrados en otras normas con contenido similar.

Por lo anterior, se plantea una proposición modificativa al contenido el artículo 2, incluyendo un nuevo beneficio general y estructurando su contenido mediante el uso de literales. También se plantea una simplificación del contenido del parágrafo 1, con el fin de garantizar la congruencia e integralidad del artículo.

La expresión "Dicha verificación se hará con el certificado"..." contenida en el inciso segundo del párrafo 2 puede limitar el ejercicio de supervisión a la verificación del certificado o su vigencia, pero no permitiría ejecutar un ejercicio de supervisión como se plantea en el primer inciso del mismo párrafo.

Por lo anterior se plantea una modificación en la redacción de ese aparte con el ánimo de garantizar que la acreditación de la vinculación del personal objetivo de este proyecto no se convierta en un trámite exclusivamente formal.

Sin otro particular, cordialmente,



GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO
Representante a la Cámara por Cundinamarca